

EL MUNDO

Jueves, 29 de julio de 2004. Año XV. Número: 5.346.

OPINION

TRIBUNA LIBRE

El decretazo insolidario de Zapatero

RAMON LUIS VALCARCEL SISO

El Gobierno de Rodríguez Zapatero derogó el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional mediante un decreto ley, mucho antes de que se cumplieran sus 100 primeros días. Y lo hizo sin aplicar su tan preconizado, y a veces tan ausente, talante. Al derogar el trasvase del Ebro, el Gobierno socialista no sólo suprime de un plumazo el trabajo que durante muchos años han realizado técnicos, científicos, regantes y usuarios para solucionar uno de los desequilibrios territoriales más graves de España, como la distribución injusta del agua, sino que viola una de las señas de identidad de nuestra Constitución: el principio de solidaridad.

El artículo 2 de nuestra Carta Magna reconoce la solidaridad interterritorial como uno de los soportes básicos del Estado de Derecho. Todos los españoles somos iguales y no deben existir comunidades de distinto rango. Al eliminar el trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional mediante un decretazo, el Gobierno de Zapatero rompe con este principio, por una simple cuestión política, sin ninguna justificación técnica, económica ni ambiental. El decretazo estaba pactado a la hora de conformar el tripartito catalán. Es una exigencia de Carod-Rovira y él mismo lo ha reconocido públicamente en repetidas ocasiones. Había que sustentar ese pacto, había que satisfacer los intereses políticos de Marcelino Iglesias en Aragón, había que seguir a pies juntillas ese postulado de la nueva cultura solidaria del agua de Maragall, que se resume en la frase: «A los del sur, ni agua». Y Rodríguez Zapatero ha pagado su peaje. La España de la política insolidaria del agua es la España diluida.

El nuevo Gobierno intenta argumentar esta decisión pero no logra convencer a la sociedad levantina. Porque es muy difícil engañar a quienes poseen una ancestral cultura del agua. Del agua escasa y, por ello, bien gestionada. La agricultura murciana es una de las más rentables de España. Su contribución al PIB nacional es incuestionable. El último informe del Instituto Nacional de Estadística define a Murcia como una de las regiones pioneras y vanguardistas

en la modernización de regadíos. Con menos agua conseguimos más, y nuestra agricultura no está subvencionada. Pero hay más datos que ponen en evidencia el disparate llevado a cabo. Según informes de Naciones Unidas, las regiones que cuentan con menos de 1.000 metros cúbicos de agua por habitante y año están llamadas al subdesarrollo y a la catástrofe ecológica. Murcia sólo cuenta con 574 metros cúbicos por habitante, lo que da una visión real del avance del desierto que se está produciendo en el sureste español.

El Gobierno de Zapatero apuesta por la desalación masiva en las costas de Valencia, Murcia y Almería, cuyas cuencas arrojan un déficit hídrico superior a los 2.100 hectómetros cúbicos por año. Para solucionar este problema, el Plan Hidrológico Nacional del anterior Gobierno, además del trasvase, ya incluía un paquete de medidas de ahorro, modernización de regadíos, reutilización e incluso una desalación complementaria y racional que utilizaba al máximo los recursos disponibles. Con todas esas medidas, el PHN anterior, basado en un gran consenso social, conseguía reducir el déficit hasta los 1.000 hectómetros cúbicos de agua, cantidad que iba a cubrir el trasvase del Bajo Ebro. Basta con leer la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y sus anexos para poder darse cuenta de que muchas de las ideas que ahora se están vendiendo como nuevas aparecen explicadas con mucha más claridad e incluso con mayor rigor científico. Cuando el nuevo Ejecutivo alega que traerá agua a las zonas necesitadas en menos tiempo, se olvida de que el trasvase ya había comenzado a realizarse, y que estaría terminado en el año 2008, de acuerdo con la programación prevista.

Es de reconocer que, como consideraron los redactores del PHN, la desalación es una medida eficaz de manera parcial y transitoria para comenzar a satisfacer la demanda de agua de ciertas zonas de España, y en particular de la costa mediterránea y las islas. Sin embargo, los ayer trasvasistas y hoy conversos a la desalación masiva esgrimen estas tecnologías como sustitutivas de las transferencias de agua. Y para ello se sirven de medias verdades. Por eso, sin redactar ningún proyecto, ya afirman que van a duplicar el volumen de agua desalada, aunque no explican algo tan elemental como dónde van a poner las desaladoras, qué sistema de captación de agua de mar van a utilizar, cómo van a suministrar la energía para que funcionen, cómo va a impactar el vertido de salmuera en las ricas praderas de posidonia de nuestro litoral o cómo se va a transportar el agua desde la costa hasta las ciudades o campos situados en el interior.

La desalación no es más barata ni mejor, como repite la ministra de Medio Ambiente a bombo y platillo, ni tampoco soluciona el problema en menos tiempo. La necesidad de transferencias de agua es irrenunciable técnica y económicamente. Y no se trata de oponer desalación versus trasvase. El Plan

Hidrológico Nacional enmarcó la política en sus justos términos técnicos y de acuerdo con la información incluida en el Libro Blanco del Agua, donde se exponían costes que el Gobierno de Rodríguez Zapatero encubre con simplicidad de datos, no diciendo toda la realidad.

Los estudios comparativos de los precios finales agua desalada-agua trasvasada deben incluir, para empezar, la recuperación total de la inversión en la planta desaladora, cuya vida útil y consiguiente periodo de amortización son considerablemente más cortos que el trasvase (una desaladora es operativa entre nueve y quince años), los costes de explotación, el coste energético del bombeo desde el nivel del mar hasta donde se necesita el agua, los costes de los emisarios submarinos que evitan el impacto de la salmuera a determinadas especies de flora marina y los costes de la insonorización de estas plantas. Todo suma y todo se debe calcular para informar al ciudadano antes de adoptar una decisión que puede arruinar su futuro.

El coste total medio del agua desalada estimado por los estudios técnicos que sostienen el Plan Hidrológico Nacional es claramente superior al coste total medio del agua trasvasada. El precio del agua desalada de una planta del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en Alicante, es de 0,70 euros el metro cúbico sin subvención, y de 0,50 euros con subvención. El trasvase del Ebro resultaría a 0,34 euros el metro cúbico sin subvención (aunque la ministra de Medio Ambiente haga otros cálculos), que, subvencionada al mismo nivel que el agua desalada, sería de 0,19 euros el metro cúbico. Si tenemos en cuenta que el 44% del agua del trasvase del Ebro se destinaría para abastecimiento y el 56 por ciento para regadío, resultaría que el agua de riego rondaría la tarifa competitiva que ya están pagando los regantes del trasvase Tajo-Segura y que tan buenos resultados está ofreciendo. ¿Por qué nos quiere penalizar el nuevo Gobierno a las comunidades levantinas a pagar más por el agua? ¿Es una discriminación con base racional o acaso es una discriminación con una base insolidaria que responde a espurios intereses partidistas?

Por otro lado, insisto, están los enormes impactos ambientales que los vertidos de las desaladoras producen en los fondos marinos y el consumo energético que necesitan para llevar el agua al interior de los territorios. Unos costes ambientales a los que habría que añadir el efecto que el supuesto plan masificador de desaladoras socialista tendría para cumplir con los objetivos de emisiones que exige el Protocolo de Kioto.

Y, para seguir desprestigiando el trasvase, el nuevo Gobierno argumenta que el consumo energético de esta infraestructura es superior al de las desaladoras. Algo totalmente erróneo e infundado ya que en los cálculos que hacen en contra del trasvase sólo tienen en cuenta la energía que se consume para

transportar el agua desde la desembocadura del Ebro. Pero no tienen en cuenta la que se recupera con los saltos de agua en las centrales hidroeléctricas. Es decir, el trasvase necesita energía para bombear el agua en ciertas zonas, pero también produce su propia energía a través de los saltos de agua.

El trasvase es una solución adoptada siguiendo las exigencias de la propia ley de aguas que hicieron los socialistas en 1985. El propio Partido Socialista -eran otros tiempos y había otros intereses- elaboró un plan con 13 trasvases, uno de los cuales partía desde el río Ebro y estaba dotado con el doble de agua que el que ahora han derogado.

Por contra, el Plan Hidrológico Nacional elaborado durante el periodo de gobierno popular estuvo precedido por la elaboración del Libro Blanco del Agua, la aprobación de los planes para cada una de las cuencas hidrográficas de España -gracias a los cuales, Murcia ha visto reducida su sequía en los últimos años-, el abrumador consenso social y el apoyo científico que se produjo en el seno del Consejo Nacional del Agua. Técnicos, regantes, usuarios e incluso comunidades gobernadas por el PSOE votaron a favor. Hubo un debate en el Parlamento que contó con el voto favorable de la mayoría de las Cámaras. Un largo proceso de estudio y debate que Rodríguez Zapatero ha roto de un plumazo, sin ofrecer nada real a cambio. Nada real salvo la prueba del peaje a ERC y a Carod-Rovira.

Derogar toda una ley que las Cortes españolas aprobaron de manera impecablemente democrática mediante un decretazo, sin que para ello concurren las circunstancias de urgencia y necesidad previstas en la Constitución, es un ejercicio político que arroja serias dudas. Por ello los Gobiernos de Valencia y de Murcia presentamos los correspondientes recursos. El Gobierno de Rodríguez Zapatero debería escuchar y atender el clamor unánime de los habitantes de Valencia, Murcia y Almería contra el decretazo que les intentan imponer. Estamos ante el paréntesis de la insolidaridad. Porque al final los hechos demostrarán que el trasvase es la mejor y más definitiva solución al problema hídrico de España y que, en definitiva, se trata de un instrumento vertebrador del Estado. Y hablo de paréntesis porque es evidente que no pierdo la esperanza de que un día no lejano haya un Gobierno en España que ejecute un proyecto de solidaridad entre los territorios que configuran el Estado, que base sus decisiones en razones fundamentadas y no en cuestiones de mero servilismo político.

Ramón Luis Valcárcel Siso es el presidente de la Comunidad de Murcia.